

**CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
CT-CI/J-4-2020**

INSTANCIA REQUERIDA:

SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES
Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de enero de dos mil veinte.

A N T E C E D E N T E S:

I. Solicitud de información. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió la solicitud tramitada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 0330000256819, requiriendo:

“Solicito atentamente:

Se me informe cuántas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales fueron presentadas en contra del Decreto 351 aprobado por el Congreso de Baja California el 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el periodo del mandato del actual Gobernador del Estado.

Se me informe su estatus procesal y se me proporcione el texto completo de la OPINIÓN emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en tales acciones de inconstitucionalidad”

II. Acuerdo de admisión de la solicitud. En acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, por conducto de su Subdirector General, una vez analizada la naturaleza y contenido de la solicitud, con fundamento en los artículos 123 y 124, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 124 y 125, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7 del Acuerdo General de Administración 5/2015, la estimó procedente y ordenó abrir el expediente UT-J/1016/2019 (foja 3).

III. Requerimiento de información. Por oficio UGTSIJ/TAIPDP/3546/2019, el doce de diciembre de dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial solicitó a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad se pronunciara sobre la existencia y clasificación de la información materia de la solicitud (fojas 4 y 5).

IV. Informe de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. Mediante oficio SI/1/2020, la Secretaria de esa Sección informó (fojas 6 a 9):

*“A efecto de atender la solicitud con número de folio **J/1016/2019**, hago de su conocimiento que de los datos obtenidos en la Red Jurídica interna de este Alto Tribunal, se advierte que en relación al tema del Decreto relacionado con el Gobernador de Baja California, identificado como la “Ley Bonilla”, se registraron las acciones de inconstitucionalidad **56/2019, 89/2019, 112/2019** y sus acumuladas **113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019** y **124/2019** y, las controversias constitucionales **269/2019, 271/2019, 307/2019** y **324/2019**, las cuales presentan el siguiente estatus:*

*La acción de inconstitucionalidad **56/2019**, así como las controversias constitucionales **269/2019, 271/2019** y **307/2019** han sido resueltas y los expedientes se encuentran bajo resguardo del Archivo Central de este Alto Tribunal.*

*En la acción de inconstitucionalidad **89/2019/2019**, se dictó la resolución correspondiente mediante la cual se desechó la demanda intentada y por ende no existe en los autos de ese expediente opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontrándose pendiente de su remisión al Archivo Central de este Alto Tribunal.*

*Finalmente, en relación con la controversia constitucional **324/2019** y las acciones de inconstitucionalidad **112/2019** y sus acumuladas **113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019** y **124/2019**, se encuentran en la etapa de instrucción y bajo resguardo de este Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, manifestando al respecto que la información contenida en dichos asuntos es reservada, incluyendo la opinión que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto, atento a lo resuelto por el Comité de Transparencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el expediente relativo a la clasificación de información **CT-CI/J-1-2016**, de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.*

No obstante, es importante señalar que la información relativa a los proveídos dictados durante la tramitación de dichos expedientes es de carácter público, por

tratarse de resoluciones intermedias dictadas en tales asuntos, que se encuentra publicada en el sitio oficial de internet de este Alto Tribunal (www.scjn.gob.mx) y puede consultarse en la siguiente liga o hipervínculo: <https://www.scjn.mx/pleno/seccion-tramite-controversias/lista-acuerdos>, por lo que puede ser obtenida por el peticionario sin generar ningún costo, o bien, en las siguientes ligas o hipervínculos:

(...)

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 3 fracción VII, 6, 7, 8, 11, 113, fracción XI, 129 y 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 1, 2, 3, 4, 13, fracción V, 14, fracción IV, y 42, último párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracciones IX y XIII, 26, fracción II, y 29 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; 9 y 16, párrafo quinto, del Acuerdo General de Administración 5/2015 (...)

Por último, como lo solicita, con el objeto de agilizar las gestiones en la localización de la información, este oficio fue remitido mediante comunicación electrónica a la dirección unidadenlace@mail.scjn.gob.mx y, al respecto, le envió la confirmación del correo electrónico correspondiente.”

V. Seguimiento a la información solicitada. Mediante oficio UGTSIJ/TAIPDP/0125/2020, el nueve de enero de dos mil veinte, el Titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial solicitó al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes que emitiera un pronunciamiento respecto de la acción de inconstitucionalidad 56/2019, así como las controversias constitucionales 269/2019, 271/2019 y 307/2019, haciendo de su conocimiento lo informado por la Sección de Trámite respecto de esos asuntos (fojas 11 y 12).

VI. Ampliación del plazo. La Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, mediante oficio UGTSIJ/TAIPDP/0159/2020, el catorce de enero de dos mil veinte, solicitó la ampliación de plazo de respuesta (foja 13), la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia en sesión de esa fecha y notificada al solicitante el diecisiete de enero último (foja 18).

VII. Informe del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes. Mediante oficio CDAACL/SGD-110-2020, el trece de enero de dos mil veinte, la titular de ese Centro de Documentación y Análisis informó (foja14):

“Al respecto, se realizó su búsqueda en las constancias que integran el expediente de la Acción de Inconstitucionalidad 56/2019, y en las Controversias Constitucionales 269/2019, 271/2019 y 307/2019 del índice del Pleno de este Alto Tribunal, y no se identificó que corran agregadas las opiniones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, en aras de favorecer el principio de acceso a la información, se ponen a disposición del peticionario la totalidad de las constancias que integran los expedientes de mérito, precisando su clasificación, en los siguientes términos:

(...)

Ello en virtud de que dicha información, bajo resguardo del Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se ubica en los términos de lo previsto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como del punto segundo, párrafo segundo del Acuerdo General 11/2017 (...) por el que es de carácter público.”

VIII. Vista a la Secretaría del Comité de Transparencia. El veinte de enero de dos mil veinte, el Titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, a través del oficio UGTSIJ/TAIPDP/0117/2020, remitió el expediente UT-J/1016/2019 a la Secretaría del Comité de Transparencia, con la finalidad de que se dictara la resolución correspondiente.

IX. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veinte, la Presidencia del Comité de Transparencia, con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23, fracción II, y 27 del Acuerdo General de Administración 5/2015, ordenó integrar el expediente **CT-CI/J-4-2020** y, conforme al turno correspondiente, remitirlo al Contralor del Alto Tribunal, a fin de que presentara la propuesta de resolución, lo que se hizo mediante oficio CT-112-2020 en esa misma fecha.

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. Competencia. El Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, fracción II, del Acuerdo General de Administración 5/2015.

SEGUNDO. Análisis. En la solicitud que da origen a este asunto se pide el número de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales presentadas en contra del Decreto 351 aprobado por el Congreso de Baja California, mediante el cual se modifica el periodo del mandato del actual gobernador de ese Estado, así como el estado procesal en el que se encuentra cada asunto y la opinión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionales informó que respecto del Decreto relacionado con el gobernador de Baja California, identificado como “Ley Bonilla”, se registraron las acciones de inconstitucionalidad 56/2019, 89/2019, 112/2019 y sus acumuladas 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 129/2019 y 124/2019, y las controversias constitucionales 269/2019, 271/2019, 307/2019 y 324/2019, por lo que con dicha información se tiene por atendida la solicitud en cuanto al número de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad que tuvieron origen con motivo de ese decreto.

De igual forma, se tiene por atendido lo relativo al estado procesal de cada uno de esos asuntos, pues se agrega en el informe del área, que la acción

de inconstitucionalidad 56/2019 y las controversias constitucionales 269/2019, 271/2019 y 307/2019 fueron resueltas y los expedientes se encuentran bajo resguardo del Archivo Central; que en la acción de inconstitucionalidad 89/2019 se dictó la resolución correspondiente desechando la demanda y que por ello no existe en los autos de ese expediente la opinión solicitada, y que la controversia constitucional 324/2019 y las acciones de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019 y 124/2019, se encuentran en etapa de instrucción, por lo que clasifica como temporalmente reservada la información contenida en esos expedientes, incluyendo la opinión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con apoyo en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el criterio sostenido por el Comité de Transparencia en el expediente CT-CI/J-1/2016, con excepción de los proveídos dictados en la tramitación, respecto de los cuales señala la liga electrónica en que pueden consultarse.

De conformidad con lo anterior, el único aspecto pendiente por atender de la solicitud que nos ocupa es lo relativo a la opinión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de dichos asuntos.

En ese sentido, se tiene en cuenta que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes informó que en los expedientes de la acción de la acción de inconstitucionalidad 56/2019 y de las controversias constitucionales 269/2019, 271/2019 y 307/2019 no se identificó que corra agregada la referida opinión, añadiendo que pone a disposición las constancias respectivas, mientras que la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad informó que la acción de inconstitucionalidad 89/2019 se desechó y por ello no existe en el expediente la mencionada opinión y que la controversia constitucional 324/2019 y las acciones de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/2019,

114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019 y 124/2019, son temporalmente reservadas, con excepción de los proveídos dictados en la tramitación.

Para emitir un pronunciamiento sobre la existencia y, en su caso, disponibilidad y clasificación de las opiniones que también se solicitaron, es necesario tener presente que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 68¹ de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo se pide opinión a la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en acciones de inconstitucionalidad contra una ley electoral.

Adicionalmente, se verificó en el módulo de consulta de expedientes en la página de Internet de este Alto Tribunal, que la acción de inconstitucionalidad 56/2019 y las controversias constitucionales 269/2019, 271/2019 y 307/2019 se desecharon y que son los expedientes bajo resguardo del Archivo Central; además, que la acción de inconstitucionalidad 89/2019 también fue desechada, de acuerdo con lo señalado por la titular de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.

Conforme a lo expuesto en los dos párrafos precedentes, se estima que existen razones jurídicas suficientes para determinar que no existe una opinión de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes de la acción de inconstitucionalidad 56/2019 y 89/2019, porque dichos asuntos se desecharon y de ello se deduce que al no tramitarse, el Ministro Instructor no solicitó que se emitiera la opinión; luego, en el caso de las controversias constitucionales 269/2019, 271/2019 y 307/2019, además de que también se desecharon, en ese tipo de asunto la ley reglamentaria

¹ARTICULO 68. (...)

Cuando la acción de inconstitucionalidad se interponga en contra de una ley electoral, el ministro instructor podrá solicitar opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

aplicable no prevé que se pida una opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Por lo anterior, en este caso no se está ante los supuestos previstos en las fracciones I y III del artículo 138 de la Ley General de Transparencia, conforme a los cuales este Comité de Transparencia deba tomar otras medidas para localizar la información solicitada, de ahí que lo procedente es confirmar la inexistencia de opinión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos citados en el párrafo inmediato anterior.

Por otro lado, en cuanto al pronunciamiento que hace la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad al clasificar como temporalmente reservadas las constancias que integran la controversia constitucional 324/2019 y las acciones de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019 y 124/2019, con excepción de los proveídos dictados en la tramitación, se retoma el criterio adoptado al resolver las clasificaciones de información CT-CI/J-1-2017, CT-CI/J-6-2017, CT-CI/J-8-2017, CT-CI/J-16-2017, CT-CI/J-27-2017, CT-CI/J-9-2018, CT-CI/J-22-2018 y CT-CI/J15-2019², partiendo de la base de que el derecho de acceso a la información encuentra cimiento en el artículo 6°, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual todo acto de autoridad (todo acto de gobierno) es de interés general y, por ende, es susceptible de ser conocido por todos. Sin embargo, como lo ha interpretado el Pleno de este Alto Tribunal en diversas ocasiones, el derecho de acceso a la información no

² La materia de los asuntos referidos versó sobre lo siguiente:

CT-CI/J-1-2017.- Versión pública del escrito inicial de demanda con sus anexos y copia del acuerdo de suspensión de los actos reclamados en una controversia constitucional.

CT-CI/J-6-2017.- Demandas de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales.

CT-CI/J-8-2017.- Demandas e informes rendidos por las autoridades en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

CT-CI/J-16-2017.- Escritos y anexos de controversias constitucionales.

CT-CI/J-27-2017.- Expedientes de controversias constitucionales.

CT-CI/J-9-2018.- Demandas de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales.

CT-CI/J-22-2018.- Versión pública del escrito inicial y del expediente de una controversia constitucional.

CT-CI/J-15-2019.- Versión pública de demandas, así como de las contestaciones de demanda y ampliaciones de demanda de controversias constitucionales

puede caracterizarse como de contenido absoluto, sino que su ejercicio está acotado en función de ciertas causas e intereses relevantes, así como frente al necesario tránsito de las vías adecuadas para ello.³

El artículo 113 de la Ley General, establece un catálogo genérico de supuestos bajo los cuales debe reservarse la información, lo cual procederá cuando su otorgamiento o publicación pueda: **1)** comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; **2)** menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; **3)** afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; **4)** poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; **5)** obstruir las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; **6)** obstruir la prevención o persecución de delitos; **7)** afectar los procesos deliberativos de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva; **8)** obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a

³ **DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. Época: Novena Época. Registro: 191967. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional Tesis: P. LX/2000. Página: 74)

los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; **9)** afectar los derechos del debido proceso; **10)** vulnerar la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; **11)** se encuentre dentro de una investigación ministerial; y, **12)** por disposición expresa de otra ley.

Junto a la identificación de esos supuestos y con el ánimo de proyectar a cabalidad el principio constitucional que les da sentido, la Ley General en sus artículos 103, 104, 108 y 114⁴ exige que en la definición sobre su configuración, además de la realización de un examen casuístico y de justificación fundado y motivado, se desarrolle la aplicación de una prueba de daño; entendido esto como el estándar que implica ponderar la divulgación de la información frente a la actualización de un daño.

Ahora, conforme a lo expuesto hasta este punto, se tiene presente el texto del artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia, en que se fundamenta la clasificación:

“Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

(...)

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;”

⁴ **Artículo 103.** En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, **aplicar una prueba de daño.**

Artículo 104. En la **aplicación de la prueba de daño**, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a **un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.**

Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la **aplicación de la prueba de daño** a la que se hace referencia en el presente Título.

(...)

Sobre el alcance del contenido de ese precepto, a partir de la clasificación de información CT-CI/J-1-2016,⁵ este Comité ha señalado que, en principio, su objeto trasciende **al eficaz mantenimiento de los procesos jurisdiccionales** -traducidos documentalmente en un expediente- no sólo en su parte formal (como integración documentada de actos procesales), sino también material (como construcción y exteriorización de las decisiones judiciales).

Así, se dijo, **cualquier información que pueda vulnerar esos extremos, en el contexto de un expediente judicial que no ha causado estado**, es susceptible de reserva, lo cual **tendría que ser analizado caso por caso y bajo la aplicación de la prueba de daño**.

Otra de las razones que permite convalidar y complementar esa conclusión interpretativa radica en el entendimiento de la intensidad de uno de los componentes que dan significado al precepto en comento y que, por tanto, atemperan su configuración, a saber: **el espacio del acceso a la información jurisdiccional**.

Como quedó descrito en líneas precedentes, a través del diseño del dispositivo de mérito, el legislador optó por reducir el acceso a la información jurisdiccional a un momento procesal concreto, marcado, en todo caso, **por la solución definitiva del expediente**, de donde es posible extraer, por tanto, que **toda información que obre en un expediente judicial, previo a su solución, se entenderá válidamente reservada** (*siempre bajo la valoración del condicionamiento relativo a la demostración de una afectación a la*

⁵ Ese criterio fue objeto de reiteración en las clasificaciones CI/J-2-2016, CI/J-3-2016, CI/J-4-2016 y CI/J-8-2016, entre otros.

conducción del expediente judicial, así como a la específica aplicación de la prueba del daño).

Precisamente en función de la identificación de la fuerza de esa nota distintiva es que sea factible confirmar que el propósito de la causal de reserva es el de lograr el **eficaz mantenimiento de los procesos jurisdiccionales en todas sus etapas**, específicamente por cuanto a la sana e imparcial integración del expediente judicial (documental y decisoria) desde su apertura hasta su total solución (cause estado), en el entendido de que, en principio, en ese lapso, las constancias que nutren su conformación sólo atañen al universo de las partes y del juzgador.

Siguiendo ese criterio, trasladado al caso que nos ocupa, se estima configurado el supuesto de reserva aludido, en tanto que sí pesa una reserva en la divulgación de las constancias que obran en los expedientes de la controversia constitucional 324/2019 y la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019 y 124/2019, y, en esa medida, se **confirma la clasificación de la información solicitada**.

Esa conclusión se refuerza al considerar que dichos asuntos se aperturan a partir del escrito de demanda y, conforme a la Ley Reglamentaria, la sentencia que se emite debe contener la precisión de las normas o actos objeto de la acción, la valoración de las pruebas conducentes, las consideraciones que sustentan su sentido, sus alcances y efectos, entre otras cuestiones⁶. Por tanto, es a partir de la demanda y las constancias que integran

⁶ Los artículos 22 y 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen lo siguiente:

“Artículo 22. El escrito de demanda deberá señalar:

I. La entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que los represente;

II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio;

III. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios;

IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado;

V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados;

VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande, y

VII. Los conceptos de invalidez.”

el expediente de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad que se delimita la ruta y alcance de la actividad jurisdiccional instada, de ahí que las constancias que integran el expediente constituyen la base para el desarrollo y solución del caso específico.

Entonces, sobre la base de la prontitud e imparcialidad que exige el artículo 17 constitucional, si lo plasmado en tales instrumentos modula el tránsito del desarrollo y solución de la controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, la divulgación de las constancias que integran el expediente respectivo no es viable antes de que se emita la resolución que ponga fin a esa controversia, como acertadamente lo determinó la Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad al clasificar como temporalmente reservados los expedientes antes citados, en tanto no se ha emitido en ellos la resolución definitiva.

Análisis específico de la prueba de daño. En adición hasta lo aquí dicho, este Comité estima que la clasificación antes advertida también se confirma desde la especificidad que en aplicación de la prueba de daño mandatan los artículos 103 y 104 de la Ley General, cuya delimitación, como se verá enseguida, necesariamente debe responder a la propia dimensión del supuesto de reserva con el que se relacione su valoración.

“Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

II. Los preceptos que la fundamenten;

III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados;

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen;

VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación.”

Lo anterior, porque como se decía en otra parte de este estudio, la citada Ley General identifica un catálogo de hipótesis a partir de las cuales deberá entenderse reservada cierta información, cuya esencia, más allá de su ámbito genérico de protección, se construye a partir de elementos y objetivos diametralmente distintos y específicos, lo que, por ende, incide en la valoración (particular intensidad) de la prueba de daño que sobre cada uno pueda prevalecer (en cada caso concreto).

En lo que al caso importa, conforme al alcance expuesto de la causa de reserva prevista en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia, se estima que la valoración de la prueba de daño debe reducirse, precisamente, a los propios elementos que de manera categórica condicionan su surgimiento, es decir, a la posibilidad general de que se materialice un efecto nocivo en la conducción de un expediente judicial previo a que cause estado, lo que ocurre en este caso, dado que aún no se resuelven la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad materia de análisis.

Sobre todo porque para este Comité de Transparencia, la rendición de cuentas que se pregona en el ámbito de los procesos jurisdiccionales se erige como un medio que permite dar certeza sobre la manera en que se resuelve un conflicto, lo que ocurre en el momento en que se emite la resolución definitiva que causa estado, pero no antes, pues ese espacio únicamente incumbe a las partes.

En ese orden de ideas, se **confirma** la reserva temporal de las constancias que obran en la controversia constitucional y en las acciones de inconstitucionalidad referidas, hasta en tanto los expedientes causen estado, lo que, en su caso, exigirá de una valoración particular sobre la información confidencial pudieran contener y de la necesidad de generar la versión pública respectiva.

En atención a lo establecido en el artículo 101 de la Ley General, se determina que la reserva temporal de la información solicitada no permite señalar o fijar un periodo concreto, toda vez que será pública (salvo la necesidad de versión pública para el caso de información confidencial o datos personales), una vez que cause estado la resolución que se llegué a emitir en esos asuntos, circunstancia que no puede establecerse con precisión en este momento.

Por cuanto a los acuerdos y resoluciones intermedias que han sido emitidos en la citada controversia constitucional y en las acciones de inconstitucionalidad solicitadas, mismos que la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad pone a disposición por encontrarse publicados en la página de internet de este Alto Tribunal, se encomienda a la Unidad General de Transparencia que informe al peticionario las ligas electrónicas en que puede acceder a esa información.

De igual forma, la Unidad General de Transparencia deberá poner a disposición del peticionario las constancias de los expedientes que remitió el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

Por lo expuesto y fundado; se,

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se tiene por atendida la solicitud que dio origen a este asunto.

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de reserva temporal de la información solicitada, acorde con lo señalado en esta resolución.

TERCERO. Se ordena a la Unidad General de Transparencia que realice las acciones señaladas en la presente determinación.

Notifíquese al solicitante, a las instancias requeridas y a la Unidad General de Transparencia.

Por unanimidad de votos lo resolvió el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado por el licenciado Juan Sebastián Francisco de Asís Mijares Ortega, Director General de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité, Maestro Christian Heberto Cymet López Suárez, Contralor del Alto Tribunal, y Maestro Julio César Ramírez Carreón, Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas; quienes firman con el secretario del Comité que autoriza.

**LICENCIADO JUAN SEBASTIÁN FRANCISCO DE ASÍS
MIJARES ORTEGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ**

**MAESTRO CHRISTIAN HEBERTO CYMET LÓPEZ SUÁREZ
INTEGRANTE DEL COMITÉ**

**MAESTRO JULIO CÉSAR RAMÍREZ CARREÓN
INTEGRANTE DEL COMITÉ**

**LICENCIADO ARIEL EFRÉN ORTEGA VÁZQUEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ**